



Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali
Sala Laboral

Magistrado Ponente:

Fabio Hernán Bastidas Villota

Veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Clase de proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	76-001-31-05-004-2019-00552-01
Juzgado de origen:	Cuarto Laboral del Circuito de Cali
Demandante:	Cruz Elena Guarín Cubillos
Demandados:	- Colpensiones - Protección S.A.
Asunto:	Confirma sentencia – Ineficacia de traslado de régimen pensional
Sentencia escrita No.	298

I. ASUNTO

De conformidad con el artículo 15 del Decreto Ley 806 de 2020, pasa la Sala a proferir sentencia escrita que resuelve los **recursos de apelación** formulados por las apoderadas judiciales de Colpensiones y Protección S.A., contra las sentencias Nos 062 y 063 emitidas el 20 de abril de 2021. Asimismo, se resuelve el **grado jurisdiccional de consulta** en favor de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Procura la demandante que se declare la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media -RPM-, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-. En consecuencia, que se ordene a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones los aportes, cotizaciones junto con los rendimientos financieros, bonos o títulos generados, sumas

adicionales de la aseguradora, gastos de administración y cualquier otra suma con los frutos e intereses; así como lo ultra y extra petita. Finalmente, requiere el pago de las costas y agencias en derecho. (Archivo 01 – Folios 02 a 13 – Archivo 01 PDF).

2. Contestaciones de la demanda.

2.1. Colpensiones

Dio contestación a la demanda mediante escrito visible a folios 118 a 125 (Archivo 01 - PDF). Se opone a las pretensiones formuladas en su contra. Manifestó que la selección de cualquiera de los regímenes existentes es única y exclusiva de la accionante. Que no se puede ordenar traslado de un afiliado, cuando faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para obtener la pensión de vejez, dado que es una prohibición legal. Propuso las excepciones de fondo de: *“INNOMINADA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “CARENCIA DEL DERECHO”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”* y *“COBRO DE LO NO DEBIDO”*.

2.2. Protección S.A.

A través de memorial visible a folios 140 a 147 (Archivo 01 - PDF), se opuso al *petitum* demandatorio. Indicó que la accionante se trasladó de régimen pensional de manera libre, espontánea y sin presiones. Que no hizo uso del derecho de retractarse, por lo que quedó válidamente afiliada. Formuló como excepciones de fondo las de: *“VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN DE LA ACTORA A PROTECCIÓN”, “RATIFICACIÓN DE LA AFILIACION DE LA ACTORA AL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD Y APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE DEVOLVER LA COMISION DE ADMINISTRACION CUANDO SE DECLARARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA”, “BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A”* y la *“INNOMINADA O GENÉRICA”*.

3. Decisión de primera instancia.

3.1. El *A quo* dictó sentencia No 062 emitida el 20 de abril de 2021. En su parte resolutive, decidió: **Primero**, declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas por pasiva. **Segundo**, declarar la ineficacia del traslado del RPM al RAIS

realizado por la demandante en Protección S.A. **Tercero**, ordenar a Protección S.A. que traslade a Colpensiones, la totalidad de lo ahorrado por la demandante en su cuenta de ahorro individual, tales como cotizaciones voluntarias y obligatorias, rendimientos financieros, bonos o títulos generados a favor de la afiliada, los gastos de administración y cualquier otra suma que represente un activo para la base pensional de la demandante. **Cuarto**, ordenar a Colpensiones que reciba por parte de Protección S.A. los conceptos antes señalados, conservando la actora todos sus derechos y garantías que tenía en el RPM antes de efectuarse el traslado al RAIS. **Quinto**, ordenar surtir el grado jurisdiccional de consulta. **Sexto**, condenó en costas a Protección S.A y a Colpensiones a favor de la demandante.

3.2. Para adoptar tal determinación, tras citar el marco normativo y jurisprudencial referente al traslado de régimen pensional, adujo que, la AFP tiene la obligación de brindar información clara, eficaz y suficiente, para que el futuro afiliado escoja la mejor decisión de su pensión. Se debe indicar las ventajas o desventajas de cada régimen pensional, sus características, el plan de pensiones y el derecho a retractarse. Manifestó que Protección S.A. no cumplió con la carga probatoria de demostrar lo antes expuesto, pues no basta con el formulario de afiliación. Por tal motivo, debe declararse la ineficacia del traslado. En lo que respecta a la prescripción, señala que la afiliación es un estado jurídico y hace parte integral del derecho pensional. Que la acción que busca la nulidad o ineficacia de una afiliación, no prescribe.

3.3. En virtud de la solicitud realizada por la parte actora referente a que se incluya en el fallo las sumas adicionales de la aseguradora. El Juez de primer grado a través de sentencia complementaria No 63 del 20 de abril de 2021, incluyó en los numerales 3 y 4 dicho concepto, para que Protección S.A. traslade esas sumas y Colpensiones las reciba, por no quedar incluida en la parte resolutive; pretensión solicitada en la demanda.

4. La apelación.

Contra esa decisión, las apoderadas judiciales de Colpensiones y Protección S.A. formularon recursos de apelación.

4.1. Apelación Colpensiones

4.1.1. Apelación Protección S.A.

4.1.2. Señala que a la actora se le brindó información precisa conforme a las normas que regulan el RAIS, frente a sus características y particularidades del mismo, para que escogiera la opción que se adecuara a sus intereses. Que no se presenta causal de ineficacia, ni existe vicio en el consentimiento.

4.1.3. Que en caso que se confirme la decisión, deberá revocarse la condena por gastos de administración toda vez que las actuaciones han sido ajustadas a la Ley. La comisión por el manejo de aportes obligatorios es de consagración legal. Que si la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior, el contrato nunca existió, y Protección S.A. no debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual. Los rendimientos no se causaron ni se debió cobrar dicha comisión. De igual forma, no hay lugar a devolver los aportes, rendimientos y los gastos, debido a que se generaría un enriquecimiento sin justa causa a favor de la actora, generando un detrimento en el patrimonio del fondo privado.

4.1.4. Frente a las sumas adicionales de la aseguradora, aduce que son reconocidas por la aseguradora que expide el seguro previsional, de invalidez y de sobrevivencia. Que se generan cuando se presenta una reclamación pensional por estos siniestros. Dice que este concepto no se causa cuando el afiliado se traslade del RAIS al RPM.

4.2. Apelación Colpensiones

4.2.1. Manifiesta que la demandante se trasladó de manera libre y voluntaria, permaneciendo por más de 23 años en el RAIS. Que el traslado a la fecha goza de plena validez, pues es una potestad única y exclusiva de la afiliada. Finalmente, dice que no se puede ordenar el traslado de régimen, cuando faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para obtener la pensión de vejez. Que la voluntad expresada en el formulario de afiliación evidencia que el ingreso de la demandante al RAIS cumplió con las exigencias legales. Que no tuvo injerencia en el traslado, por lo que pide no se condene en costas.

4.2.2. Frente a la sentencia complementaria, se ratifica en los argumentos antes esbozados, pues las sumas adicionales de la aseguradora hacen referencia a una condena frente a Protección S.A.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. Alegatos de conclusión

Los apoderados judiciales de las partes, previo traslado para alegatos de conclusión de conformidad con el artículo 15 del Decreto Ley 806 del 4 de junio de 2020¹, se pronunciaron de la siguiente manera:

5.1.1. **Colpensiones:**

Reitera que la accionante escogió de manera libre y voluntaria el fondo de pensiones al cuál quería pertenecer. Dice que durante varios años nunca utilizó la potestad que le brindaba la Ley de retornar al RPM. Que no se puede ordenar traslado de un afiliado, cuando faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para obtener la pensión de vejez

5.1.2. **Parte demandante:**

Solicita se confirme el fallo de primer grado. Señala que no le fue informado frente a las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. Tampoco le fue explicado su derecho de retracto. Situaciones que permiten observar la omisión del deber de información. De esta manera, afirma que hay lugar a que Protección S.A. devuelva los conceptos ordenados en las sentencias.

5.1.3. **Protección S.A:**

No se pronunció dentro del término concedido para formular alegatos de conclusión.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problemas jurídicos.

Corresponde a la Sala establecer si:

1.1. ¿Fue acertado declarar la ineficacia del acto de afiliación y/o traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad?

1.2 ¿Es acertado ordenar a Protección S.A. que, en virtud de la declaratoria de ineficacia del acto de traslado de régimen pensional, además de las cotizaciones y

¹ "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".

rendimientos financieros, traslade a Colpensiones los gastos de administración, bonos pensionales y sumas adicionales de la aseguradora?

1.3. ¿Es objeto de prescripción la acción que versa sobre la ineficacia del traslado de régimen?

1.4. ¿Es procedente condenar en costas de primera instancia a cargo de Colpensiones?

2. Respuesta al primer interrogante.

2.1. La respuesta al **primer** interrogante es **positiva**. Fue acertada la decisión del *A quo* de declarar la ineficacia de traslado de régimen pensional. Correspondía a la AFP Protección S.A., demostrar que la afiliación de la demandante al RAIS fue una decisión suficientemente informada, con conocimiento de los beneficios, riesgos y consecuencias que implicaba su traslado. Al no cumplir con esta carga, resulta procedente declarar la ineficacia del traslado. Asimismo, la declaratoria de ineficacia no comporta un riesgo para la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

2.2. Los fundamentos de la tesis son los siguientes:

La selección de uno de los dos regímenes que el Sistema de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993 trajo consigo, RPM o RAIS, debe obedecer a una decisión libre y voluntaria por parte de los afiliados. Conforme lo establece el literal b) del artículo 13 de la referida ley, esa decisión se materializa con la manifestación por escrito que al momento de la vinculación o traslado hace el trabajador o servidor público a su empleador. Esta manifestación se entiende exteriorizada a través del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia Financiera, para cuya validez es necesario que se encuentre debidamente diligenciado y suscrito por el afiliado, por el empleador y por la persona autorizada por la administradora de pensiones.

A su turno, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, consagra que cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos o instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedora al pago de una multa, quedando en todo caso sin efecto la afiliación efectuada en tales condiciones, para que la misma se vuelva a realizar en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Por lo anterior, la libertad y voluntad del interesado en la selección de uno cualquiera de

los regímenes que componen el subsistema de Seguridad Social en Pensiones, así como también el derecho a obtener la información debida y relevante, constituyen elementos que resultan intrínsecos a la esencia del acto de afiliación.

En ese sentido, el precedente judicial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, en sentencias 31989 y 31314 de 9 de septiembre de 2008, y de manera más reciente en fallos SL19447-2017, SL4964-2018, SL1452-2019, SL4373-2020 y SL4811-2020, señala que la ineficacia se genera cuando se omite el deber de información que les asiste a esta clase de entidades o se efectúa indebidamente.

Igualmente se ha señalado que las AFP, desde su fundación e incorporación al sistema de protección social, tienen el: *“deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”*, premisa que implica dar a conocer: *“las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes”*, como podría ser la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008).

En esta dirección, en sentencia SL1688-2019, se sintetizó la evolución normativa del deber de información que recae sobre las administradoras de pensiones, desde la Ley 100 de 1993, pasando por el Decreto 663 de 1993, la Ley 795 de 2003, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, hasta la Ley 1748 de 2014; sobre lo cual se concluyó que este se encontraba inmerso en las funciones de las administradoras desde su creación, y con el transcurrir del tiempo, la intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría.

Adicionalmente, se puntualizó en dicha providencia que: *“el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente”* y que el acto de traslado: *“debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado”*.

Sobre la inversión de la carga de la prueba, frente a quién le corresponde demostrar la existencia del consentimiento informado, precisó que obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual, no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –*cuando no imposible*- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la

otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que: **(i)** la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; **(ii)** la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que **(iii)** es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

2.3. Caso en concreto.

2.3.1. Descendiendo al *sub lite*, se desprende de la información suministrada por Colpensiones², Protección S.A.³, de la certificación de Asofondos⁴, de los formularios de traslado al RAIS⁵ y del certificado de la información laboral para bono pensional⁶; que la demandante ha estado vinculado al Subsistema de Seguridad Social en Pensiones de la siguiente forma:

- a. En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, desde 20 de diciembre de 1994 al 30 de septiembre de 1996.
- b. Según el formulario de vinculación o traslado y el historial de vinculaciones, el 18 de junio de 1998, la accionante se trasladó al RAIS a través de Davivivir pensiones y cesantías. Posteriormente a la AFP ING fondo de pensiones y cesantías. Dicha afiliación se hizo efectiva el 01 de diciembre de 1996 hasta el 30 de diciembre de 2012. Posteriormente, y en virtud de una cesión, la mencionada entidad, se transformó en Protección S.A. De esta manera, se trasladó a la actora a dicha entidad, con fecha de efectividad del **31 de diciembre de 2012**.

2.3.2. En la demanda se argumenta que, en el acto de traslado del RPM al RAIS, la promotora no recibió la suficiente información al momento del traslado. Le fue indicado que era mejor estar afiliada al RAIS, que podía pensionarse a los 50 años y que el I.S.S. se acabaría. No se le explicó las características, ventajas, desventajas, y el IBC con el que debía cotizar para obtener la pensión de vejez. Así como el derecho a

² Flios 15 a 17, 126 A 130, Archivo 01 PDF y, Exp. Adtivo 02 PDF

³ Fls. 32 a 37, 148 a 156, 163 A 168 Archivo 01 PDF

⁴ Fl 159 Archivo 01 PDF

⁵ Fl 40, 43, 58 Archivo 01 PDF

⁶ Flios 157 a 158 Archivo 01 PDF

retractarse.

Por su parte, la AFP Protección S.A. dio respuesta al introductorio indicando que el accionante se trasladó de régimen pensional de manera libre, espontánea y sin presiones. Que recibió información sobre los beneficios y limitaciones de los dos regímenes (folios 140 a 147 Archivo 01PDF).

2.3.3 Para la Sala, Protección S.A. no demostró que haya brindado, a la demandante, la información suficiente para llevar a cabo el traslado de régimen. Esto es, los beneficios que proporciona el régimen, la proyección del monto de la pensión que se podría recibir, la diferencia en el pago de los aportes, los perjuicios o consecuencias que podría afrontar si los dineros de la cuenta no generaban rendimientos, y la pérdida del régimen de transición, de ser beneficiario del mismo (SL4811-2020). A pesar de que se allegó el formulario de traslado suscrito por la actora, en los que se hace constar que la escogencia del RAIS fue efectuada de forma libre, espontánea y sin presiones, lo cierto es que, su sola suscripción, no es prueba de la debida asesoría que debía suministrar la AFP. A su vez, las otras documentales aportadas solo dan cuenta de la historia laboral y las administradoras a las que ha estado afiliado la accionante.

Luego, tampoco es de recibo el reproche concerniente a que la promotora de la acción se encuentra a menos de 10 años para pensionarse y ha permanecido por más de 23 años en el RAIS. Dichas circunstancias *per se*, no pueden convalidar las deficiencias del traslado de régimen pensional que le son atribuibles al fondo privado. Por tanto, se despacha de manera desfavorable el argumento de la recurrente Colpensiones.

Finalmente, advierte la Sala que la decisión de primer grado no lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de Pensiones, toda vez que los recursos que debe reintegrar la AFP Protección S.A. a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento y financiamiento del derecho pensional con base en las reglas del R.P.M., lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas. Ello, ha sido decantado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL2877-2020 del 29 de julio de 2020, radicación No. 78667. Argumento ratificado en sede de tutela a través de fallo STL11947-2020 del 16 de diciembre de 2020, radicación No. 61500.

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la ineficacia del traslado, al no haberse demostrado que la AFP Protección S.A. suministró a la actora la suficiente información para acogerse al RAIS.

3. Respuesta al segundo problema jurídico.

3.1. La respuesta es **positiva**. Protección S.A., debe trasladar los valores que percibió por conceptos tales como cotizaciones, y rendimientos financieros. Asimismo, gastos de administración y bonos pensionales, primas y porcentaje destinado al Fondo de garantía de pensión mínima.

3.2. Los fundamentos de la tesis son los siguientes:

3.2.1. De conformidad con lo consagrado en el inciso 2° del artículo 59 de la Ley 100 de 1993, el RAIS está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos **rendimientos financieros**. Los literales a) y b) del artículo 60 de la misma ley, contemplan que el reconocimiento y pago de las prestaciones del RAIS, dependerá, entre otras cosas, de los aportes de los afiliados y empleadores, y de los rendimientos financieros. Como los rendimientos o utilidades se produjeron por la inversión de un capital que pertenece al afiliado, resulta natural y evidente que éste sea de su beneficiario, pues el dueño de lo principal también lo será de lo accesorio. En caso contrario, se estaría habilitando un enriquecimiento de carácter injustificado. La viabilidad de trasladar dichos conceptos se ha decantado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL4360 del 9 de octubre de 2019, radicación No. 68852; SL2877 del 29 de julio de 2020, radicación No. 78667 y SL4811 del 28 de octubre de 2020, radicación No. 68087, entre otras.

3.2.2. En cuanto a los **gastos de administración**, son valores que debieron ingresar al Régimen de Prima Media. Debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 dispone que, del valor de la cotización o aporte, el 3% se destinará para gastos de administración, para el pago de la prima de reaseguro y el pago de las primas del seguro de invalidez y sobrevivientes. En virtud del artículo 1746 del C.C., la ineficacia da lugar a la restitución al estado anterior como si nunca hubiera existido el acto. En este sentido, si Colpensiones era quien tenía que recibir la totalidad de la cotización, corresponde a Protección S.A., asumir la devolución de estos conceptos. Por tanto, resulta procedente que el fondo privado demandado, reintegre su monto a Colpensiones (SL4360 del 9 de octubre de 2019, radicación 68852).

La decisión del *A quo* de ordenar al fondo privado demandado, la devolución del rubro denominado gastos de administración en proporción al tiempo en que la demandante estuvo vinculada a la misma, se ajusta a derecho. En providencia SL2877-2020 del 29

de julio de 2020, radicación No. 78667, se concluyó que: “...*la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional **deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional.** Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, **las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones**”. Por tal motivo, se confirmará el fallo de primer grado, en tal sentido.*

3.2.3. Respecto a las **sumas adicionales de la aseguradora**, debe entenderse como todas aquellas otras sumas existentes en la cuenta de la afiliada por cualquier concepto, las cuales deben retornarse. Siendo esto así, la providencia reprochada no merece reparo alguno.

4. Respuesta al tercer problema jurídico.

La respuesta a este interrogante es **negativa**. Frente a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional no resulta aplicable la figura de la prescripción. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL1421-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL2611-2020, entre otras, sostiene que la prescripción no se aplica a pretensiones declarativas, como la ineficacia del traslado. Además, su nexo de causalidad con el derecho pensional, la hace igualmente imprescriptible.

5. Respuesta al cuarto problema jurídico.

La respuesta a este interrogante es **positiva**. En lo que atañe a la imposición de costas de primera instancia a cargo de Colpensiones, es menester indicar que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P., este concepto tiene naturaleza netamente procesal. Por ende, su imposición está atada a las resultas del proceso, puesto que en ese escenario se define cuál extremo de la litis es acreedor o deudor de las mismas, sin necesidad de analizar situaciones de buena o mala fe de las partes, e inclusive las potestades de las mismas, vía administrativa. Por ende, habrá de confirmarse la condena en costas impuestas por el *A quo* a Colpensiones.

6. Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 365 del C.G.P., se impondrá condena en costas de segunda instancia a Colpensiones y a Protección S.A., en favor de la actora.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencias objetos de apelación y consulta, por lo antes expuesto.


SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia, a cargo de las apelantes Colpensiones y Protección S.A., y en favor de la demandante. Las agencias en derecho se fijan en suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

Firma digitalizada para
actuación judicial

FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA
Cali-Vie
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA


CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA
(Salvamento de voto parcial)


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma escaneada por salubridad pública
(Art. 11 Dcto 491 de 2020)